**ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA**

PROYECTO DE LEY

**LEY PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESQUEMA TARIFARIO DEL SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

KATTIA CAMBRONERO AGUILUZ

EXPEDIENTE N.º25.217

LEY PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESQUEMA TARIFARIO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Expediente N.º25.217

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El servicio público de suministro de energía eléctrica desempeña un papel fundamental en el bienestar de la población, la competitividad del país y el desarrollo económico y social. En Costa Rica, el modelo de regulación tarifaria vigente establece la fijación anual de tarifas por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Este esquema ha generado rigideces que limitan la competitividad y la capacidad de adaptación a las condiciones del mercado.

La fijación anual de tarifas de energía eléctrica impide que los grandes consumidores e inversionistas negocien acuerdos de largo plazo en función de sus necesidades y de las condiciones de oferta y demanda, restringiendo el desarrollo de un entorno más dinámico y eficiente.

Este proyecto de ley busca reformar este modelo, permitiendo una planificación más eficiente a mediano y largo plazo, al eliminar la fijación anual de tarifas de energía eléctrica y establecer un esquema de revisión más predecible y ajustado a las mejores prácticas internacionales. Con un sistema de fijación tarifaria más confiable y basado en periodos de ajuste adecuados, se reducen las distorsiones generadas por revisiones constantes, eliminando costos excesivos y promoviendo una mayor estabilidad para los prestadores del servicio de suministro de energía eléctrica y los consumidores.

La reforma al modelo tarifario en Costa Rica representa una estrategia clave para impulsar tanto el desarrollo económico como el bienestar social. Al reducir la incertidumbre regulatoria, fomentar la inversión y mejorar la eficiencia del sector eléctrico, se generan beneficios directos para empresas y consumidores. Un sistema tarifario de energía eléctrica más equitativo y eficiente no solo fortalecerá la competitividad del país, sino que también contribuirá a la reducción de la desigualdad y a una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.

I. ANTECEDENTES

Según lo señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)¹, el actual esquema de regulación tarifaria en Costa Rica, administrado por la ARESEP, establece precios con base en los costos operativos de los proveedores, asegurando su estabilidad financiera. Sin embargo, este modelo limita la competencia y genera incrementos tarifarios que afectan directamente a los consumidores y a la competitividad del país. La ausencia de incentivos para mejorar la eficiencia y la posibilidad de trasladar costos a los usuarios han resultado en tarifas más altas que en otros países de la región, impactando negativamente la inversión y el desarrollo económico.

La misma ARESEP ha señalado esta situación en audiencia llevada a cabo el 13 de octubre de 2022 en la Comisión Especial del Sector Energético Nacional donde Mario Mora, intendente de energía mencionó que la normativa vigente establece ajustes tarifarios anuales, mientras que a nivel internacional es común realizar revisiones de costos en períodos de tres a cinco años, con mecanismos de ajuste intermedios². Esta disposición ha limitado la visión a mediano y largo plazo, ya que los prestadores de servicios cuentan con la facultad de solicitar aumentos tarifarios cada año, lo que dificulta la planificación estratégica y la reestructuración de proyectos necesarios para el desarrollo del sector.

II. EFICIENCIA Y MODERNIZACIÓN EN LA REGULACIÓN TARIFARIA ELÉCTRICA

El modelo actual de regulación tarifaria en Costa Rica no ha logrado una eficiencia en la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica que reduzca los costos para los usuarios. Se requiere un esquema tarifario que brinde señales económicas adecuadas para incentivar el uso eficiente del servicio y optimizar la infraestructura existente³.

¹ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2020). *Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/84cbb575-es>

² Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Comisión especial del sector energético nacional expediente N.º 23.168. Acta de sesión ordinaria N.º 11. 13 de octubre de 2022.

³ Jiménez Gómez, R., & Martínez Piva, J. C. (2023). *Modernización de las tarifas eléctricas en Costa Rica – hacia la senda de la eficiencia*. Revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible, 8(2), 1-17. <https://doi.org/10.15359/peds.8-2.2>

Las mejores prácticas internacionales en regulación tarifaria establecen esquemas de revisión de costos en períodos de tres a cinco años, con mecanismos de ajuste intermedios para responder a fluctuaciones económicas o cambios en la demanda. Este modelo, adoptado en países con mercados energéticos y de servicios avanzados, permite que las tarifas reflejen costos reales sin generar inestabilidad ni traslados abruptos de costos ineficientes a los consumidores. La implementación de mecanismos de fijación tarifaria más espaciados en el tiempo, como los utilizados en países desarrollados, favorecería la estabilidad y competitividad del sector⁴.

La eficiencia en la gestión de las empresas de suministro de energía eléctrica es un factor clave para la reducción de tarifas y la optimización de recursos, beneficiando tanto a los consumidores como a la competitividad del país. Actualmente, el modelo de fijación tarifaria anual en Costa Rica no incentiva la eficiencia operativa, ya que permite a los operadores trasladar aumentos de costos directamente a los usuarios sin la necesidad de optimizar su desempeño. Al eliminar distorsiones en la fijación de precios y fomentar la productividad en la prestación del servicio, se generarán condiciones para tarifas más competitivas y sostenibles, asegurando un acceso equitativo y eficiente a los servicios públicos esenciales.

III. PLANIFICACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO

La planificación en los servicios públicos es esencial para asegurar que las acciones gubernamentales estén alineadas con las necesidades de la sociedad, optimizando recursos y garantizando la prestación de servicios de calidad.

Una mala planificación puede generar sobrecostos, encareciendo innecesariamente servicios esenciales como el suministro de electricidad, debido a gastos innecesarios, proyectos mal ejecutados y el uso ineficiente de los recursos disponibles. Cuando no se realiza una previsión adecuada de la demanda y del mantenimiento de las infraestructuras, los sistemas eléctricos pueden operar con sobrecarga o, en el peor de los casos, quedar obsoletos sin que se implementen mejoras oportunas. La falta de inversión en infraestructura, derivada de una mala planificación,

⁴ Jiménez Gómez, R., & Martínez Piva, J. C. (2023). *Modernización de las tarifas eléctricas en Costa Rica – hacia la senda de la eficiencia*. Revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible, 8(2), 1-17. <https://doi.org/10.15359/peds.8-2.2>

no solo genera costos adicionales en reparaciones y emergencias, sino que también limita la capacidad de expansión de sectores productivos clave de la economía. Además, genera fallas recurrentes en servicios públicos esenciales y puede traducirse en un incremento de tarifas para los consumidores.

La adopción de metodologías que reduzcan los costos de inversión a largo plazo es fundamental para evitar aumentos innecesarios en las tarifas eléctricas. El ajuste de tarifas en períodos más largos es un enfoque que fomenta la planificación estratégica a mediano y largo plazo, ya que los operadores pueden estructurar inversiones en infraestructura, innovación y eficiencia operativa con mayor certeza financiera⁵. Al adoptar un modelo similar en Costa Rica, se promoverá la transparencia en la determinación de tarifas, se reducirán incentivos para aumentos recurrentes sin sustento técnico y se eliminarán ineficiencias que encarecen innecesariamente los servicios públicos. Se fomentará que las empresas operen con mayor responsabilidad financiera, evitando que las malas prácticas recaigan en los consumidores. Esto fortalecerá la competitividad del país y generará un entorno más atractivo para la inversión en sectores clave de la economía.

IV. COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

La regulación tarifaria en el servicio público de suministro de energía eléctrica no solo determina su costo para los consumidores, sino que también incide en la competitividad de las empresas, la inversión y la calidad de vida de la población, afectando la economía de los hogares y reduciendo la competitividad de las empresas, que deben asumir costos elevados en energía, transporte y otros servicios clave para su productividad. Un sistema tarifario más eficiente permitiría precios más competitivos para la industria y el comercio, fomentando la inversión y el crecimiento económico.

La gestión eficiente de los recursos de manera eficiente y la reducción de los costos de producción generan un ambiente favorable para la inversión y la expansión empresarial. Sin embargo, el modelo tarifario eléctrico actual en Costa Rica ha limitado

⁵ Jiménez Gómez, R., & Martínez Piva, J. C. (2023). *Modernización de las tarifas eléctricas en Costa Rica – hacia la senda de la eficiencia*. Revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible, 8(2), 1-17. <https://doi.org/10.15359/peds.8-2.2>

esta posibilidad, ya que la revisión anual de tarifas impide que tanto empresas como inversionistas puedan estructurar planes estratégicos a largo plazo.

Según estudios recientes, elementos como la infraestructura (disponibilidad, calidad y costo de la energía, transporte, telecomunicaciones, insumos básicos y servicios tecnológicos), la estabilidad macroeconómica y el acceso al financiamiento juegan un papel clave en la competitividad de los países en desarrollo⁶. En este sentido, la reforma tarifaria propuesta no solo beneficiaría a las empresas que buscan negociar tarifas eléctricas en condiciones más flexibles, sino que también contribuiría a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Un esquema tarifario más eficiente reduciría la carga de costos excesivos sobre los consumidores y eliminaría distorsiones en el mercado, incentivando una asignación más efectiva de los recursos y promoviendo el desarrollo sostenible.

Actualmente, la posibilidad de ajustes anuales en las tarifas eléctricas ha generado un modelo en el que los prestadores del servicio eléctrico no tienen incentivos reales para mejorar su desempeño, ya que pueden trasladar cualquier aumento de costos a los usuarios sin necesidad de optimizar sus operaciones. En cambio, al permitir acuerdos de largo plazo, se fomentaría la adopción de tecnologías más eficientes y estrategias de reducción de costos a través de la innovación. Esto no solo beneficiaría a los grandes consumidores, sino que también contribuiría a la competitividad del país en los mercados internacionales.

La existencia de revisiones tarifarias anuales introduce incertidumbre en el mercado, por lo que la reforma propuesta también puede impactar positivamente el atractivo de Costa Rica para la inversión extranjera, ya que la estabilidad y claridad en los servicios básicos para su operación son factores clave en las decisiones de inversión. Al modernizar su regulación, Costa Rica podría posicionarse como un destino más competitivo y confiable para inversionistas tanto nacionales como internacionales. Para las empresas, contar con tarifas eléctricas predecibles a largo plazo les permite una mejor planificación financiera, evitando el impacto negativo de aumentos inesperados que afectan su rentabilidad. A su vez, la reducción de costos operativos generada por un

⁶ Medeiros, V., Gonçalves Godoi, L., & Camargos Teixeira, E. (2019). La competitividad y sus factores determinantes: un análisis sistémico para países en desarrollo. *Revista de la CEPAL*, (129), 1-26. <https://doi.org/10.18356/abcd1234>

modelo tarifario más eficiente incentivaría la inversión en sectores estratégicos, favoreciendo la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía.

El impacto social de la reforma es igualmente significativo. Un esquema tarifario más eficiente se reflejaría en tarifas eléctricas más accesibles para los hogares, especialmente en comunidades vulnerables donde el costo de los servicios públicos representa una proporción considerable del ingreso familiar. Además, al eliminar ineficiencias en la gestión de las empresas de suministro de electricidad, se garantizaría una mejor calidad del servicio, evitando interrupciones y deficiencias que afectan el bienestar de la población. La planificación a largo plazo en la fijación de tarifas permitiría además una expansión ordenada de la infraestructura eléctrica.

El Consejo de Promoción de la Competitividad ha señalado que los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) son los que sufren más por interrupciones prolongadas y altas tarifas de servicio eléctrico, lo cual profundiza la desigualdad que existe entre estas zonas y la GAM⁷. En muchas zonas del país, la falta de infraestructura adecuada y los costos elevados de los servicios han limitado la instalación de nuevas industrias y comercios, afectando el crecimiento económico local. Con un esquema tarifario más flexible, se generarían condiciones más atractivas para el establecimiento de empresas en regiones fuera del Gran Área Metropolitana, descentralizando la actividad económica y promoviendo el desarrollo de nuevas oportunidades laborales en todo el país.

Por lo anterior se somete a consideración de las y los Diputados el presente proyecto de ley:

⁷ Gutiérrez Wa-Chong, T. (2024, octubre 5). *Desigualdad en el servicio eléctrico nacional debe combatirse, afirma Shirley Saborio*. La República. <https://www.larepublica.net/noticia/desigualdad-en-el-servicio-electrico-nacional-debe-combatirse-afirma-shirley-saborio>

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESQUEMA TARIFARIO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ARTÍCULO 1.- OBJETIVO DE LA LEY

El presente proyecto de ley tiene como objetivo eliminar la fijación anual de tarifas asociadas al suministro de energía eléctrica por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Con esta reforma, se busca fomentar la competitividad del sector, permitiendo que los usuarios accedan a tarifas eléctricas más justas y promoviendo una mayor eficiencia en la prestación de este servicio público, que a su vez incentive la inversión y genere beneficios directos para los consumidores al reducir costos innecesarios y mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica.

ARTÍCULO 2.- Se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), N.º 7593, del 09 de agosto de 1996 y sus reformas, que en adelante se leerán de la siguiente manera:

Artículo 30.- Solicitud de fijación o cambios de tarifas y precios

Los prestadores de servicios públicos, las organizaciones de consumidores legalmente constituidas y los entes y órganos públicos con atribución legal para ello, podrán presentar solicitudes de fijación o cambios de tarifas. La Autoridad Reguladora estará obligada a: recibir y tramitar esas peticiones, únicamente cuando, al presentarlas, cumplan los requisitos formales que el Reglamento establezca. Esta Autoridad podrá modificar, aprobar o rechazar esas peticiones. De acuerdo con las circunstancias, las fijaciones de tarifas serán de carácter ordinario o extraordinario.

De acuerdo con las circunstancias, las fijaciones tarifarias serán de carácter ordinario o extraordinario. Serán de carácter ordinario aquellas que contemplen factores de costo e inversión, de conformidad con lo estipulado en el inciso b) del artículo 3 de esta ley. Los prestadores deberán presentar, por lo menos una vez al año, un estudio ordinario. La Autoridad Reguladora podrá realizar de oficio modificaciones ordinarias y deberá otorgarles la respectiva audiencia según lo manda la ley.

No obstante, en el caso de los prestadores del suministro de energía eléctrica, estos estarán obligados a presentar el estudio ordinario al menos una vez cada cinco (5) años.

Serán fijaciones extraordinarias aquellas que consideren variaciones importantes en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza mayor y cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste. La Autoridad Reguladora realizará, de oficio, esas fijaciones.

Artículo 31.- Fijación de tarifas y precios

Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestadoras. En este último caso, se procurará fomentar la pequeña y la mediana empresa. Si existe imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará la situación particular de cada empresa.

Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público.

La Autoridad Reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual de tarifas, en función de la modificación de variables externas a la administración de los prestadores de los servicios, tales como inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora considere pertinente.

No obstante, tratándose de los prestadores del servicio público de suministro de energía eléctrica, la aplicación de modelos de ajuste en las tarifas será de carácter quinquenal.

De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables:

- a) Garantizar el equilibrio financiero.
- b) El reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos mecanismos de contratación de financiamiento de proyectos, sus formas especiales de pago y sus costos; efectivos; entre ellos, pero no limitados a esquemas tipo B: (construya y opere, o construya, opere y transfiera, BOO), así como arrendamientos operativos y/o arrendamientos financieros y cualesquiera otros que sean reglamentados.
- c) La protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- El Poder Ejecutivo deberá emitir la reglamentación respectiva, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Kattia Cambronero Aguiluz
Diputada

Diputado (a)	Firma